

TURRENT

◆◆Ante el actual descontento de la sociedad con la clase política, el país necesita un movimiento que ponga al Estado al servicio de los ciudadanos.

El Estado autocomplaciente

ISABEL TURRENT

Los Estados distan mucho de ser entes inmutables. Es raro el país en donde la organización política impresa en constituciones y otras normas corresponde de manera precisa a la realidad. La democracia no es la excepción. Se ha dicho muchas veces, con razón, que todo sistema político es producto de la contingencia: resultado azaroso de la combinación de una multitud casi inmanejable de factores. Producto del conjunto de hábitos, percepciones, prejuicios, tradiciones y legados históricos que forman la cultura política de una sociedad; de circunstancias externas, como los vaivenes de la geopolítica o las crisis globales, y del juego entre las instituciones estatales –y quienes gobiernan–, y la sociedad en su conjunto. Por ello, el buen funcionamiento político de un sistema da la impresión de ser un accidente afortunado. “El más afortunado que puede favorecer a una sociedad, porque todas las instituciones sociales, su carácter y el de los seres humanos que se forman dentro de él, dependen a fin de cuentas del gobierno y del orden político”.*

Es imposible, en efecto, negar la importancia de la política y también erradicar el azar en su evolución (o, en algunos casos, “involución”). Precisamente por eso, y tal vez desde la primera vez que un grupo sedentario pactó con un político un acuerdo para su defensa y protección a cambio de obediencia y sustento, las sociedades han tratado de contrarrestar la contingencia con reglas claras, y de ajustar la realidad al “modelo ideal” de gobierno que han escogido.

Hay muchos indicadores para diagnosticar cuando la fortuna ha dado la espalda a una sociedad y los que detentan el poder –y el Estado que representan– están funcionando mal. Derrotas militares, empobrecimiento, inseguridad, rezago económico son apenas unos de ellos. Pero el mejor y más evidente es el cambio en el ánimo de una sociedad: cuando el descontento empieza a dominar la conducta de uno de los dos principales protagonistas de la política, la ciudadanía que depositó la defensa de sus derechos y su protección en manos de sus gobernantes.

México está a punto de transitar por el último año de la primera década del siglo XXI en una situación de descontento generalizado. Hay un evidente malestar político en casi todos los sectores de la sociedad. El descontento va más allá de los acci-

dentos impredecibles que han afectado negativamente al país. La crisis financiera fue uno de ellos. Llegó de fuera y México era uno de los países más expuestos dada su cercanía económica con Estados Unidos. Pero otras naciones que fueron afectadas gravemente por la crisis en un principio, la sortearon mejor que nosotros tomando medidas exactamente opuestas a las que tomó el gobierno mexicano: no alzas de impuestos, sino paquetes de estímulo a la inversión y al consumo. China, Brasil y Chile, entre otros, han recuperado una alta tasa de crecimiento. La economía mexicana se contrajo en 2009 en más de 7 por ciento.

La crisis se convirtió así en la mejor prueba de que no es el azar el causante de nuestros problemas, sino el funcionamiento del sistema político. Se ha abierto una brecha creciente entre la democracia inscrita en las leyes y el orden político que nos gobierna y, asimismo, entre la sociedad y las instituciones estatales. Esa es la causa del malestar social.

El Estado, que debería estar al servicio de los ciudadanos, se ha vuelto un Estado autocomplaciente que sirve a sus propios intereses. Los partidos –mimetizados con el PRI– legislan a espaldas de las demandas ciudadanas. Se han negado a incluir en su agenda, por ejemplo, la reelección de representantes –única manera de que sean responsables frente al electorado–, han dado rango constitucional a medidas que vulneran la libertad de expresión –un derecho fundamental en cualquier democracia– y se han blindado contra la posibilidad de que los votantes opten por candidatos independientes. La democracia mexicana se ha cartelizado y los políticos se han convertido en servidores de sí mismos y de unos cuantos, en lugar de servir a todos. Nos gobierna un triángulo de hierro conformado por los políticos, el gran capital y los burócratas, blindado en su disfuncionalidad y sordo a las demandas de la sociedad.

México necesita una sociedad civil organizada y activa que obligue al Estado a transitar de nuevo por un sendero democrático. Un movimiento que demande al Estado el cumplimiento de sus tareas fundamentales –protección, justicia y bienestar– y la adopción de las reformas que a todas luces el país necesita. Éste es el gran desafío que enfrentamos, porque una sociedad civil eficaz tiene que compartir valores y creencias comunes. Mientras una numerosa minoría siga aferrada a modelos del pasado, a ideologías anacrónicas y a las promesas populistas de políticos irresponsables, el Estado autocomplaciente seguirá echando raíces.

* Edward Banfield, citado en Geoff Mulgan, Good and Bad Power, 2006.

